



ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR LOS SEÑORES LUIS FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ Y ADALBERTO ESCOBAR E., CONTRA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.

Expediente Nro.	11-001-02-30-000-2021-00198-00
------------------------	---------------------------------------

①

Acacias, febrero 23 de 2021

Señores Magistrados
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Bogotá D. C.



Respetados Magistrados, nosotros los abajo firmantes, personas privadas de la libertad, reclusos en el patio 4 de la Cárcel de Acacias, acudimos ante esta alta Corporación, para instaurar esta acción de Tutela, artículo 86 de la Constitución Nacional, Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de febrero 19 de 1992 en contra de los honorables funcionarios públicos:

[1] Doctor Iván Duque Márquez

Presidente de la República, representante de la rama ejecutiva artículo 188 CN
Simboliza la unidad Nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

[2] El congreso de la República formado por el senado y cámara de representantes

②

Rama del poder legislativo, accionamos al presidente del senado y al presidente de la Camara de Representantes, por ser el cuerpo legislativo encargado de crear las leyes, que benefician a todo el pueblo Colombiano, en un Estado Social de Derecho, articulo 150 de la Constitución Nacional; igualmente solicitamos que esta acción constitucional se de a conocer a los Honorables Senadores:

Dr. Iván Cepeda C.
 Dr. Jorge Enrique Robledo
 Dr. Roy Barreras
 Dr. Gustavo Petro



Para que estos senadores sean garantes y hagan sus pronunciamientos respectivos.

[3] Accionamos a la Honorable Corte Constitucional, porque es la encargada de la guarda de la integridad de la Constitución, en los estrictos y preusos términos, del articulo 249 de la Constitución Política, cuyo presidente es el Honorable Magistrado Dr. Alejandro Linarez

[4] Accionamos a la fiscalia General de la Nación, por hacer parte de la Rama Judicial, igualmente tiene que ver con las políticas criminales del Estado

③

Según el artículo 250 de la Constitución Nacional, representada por el Sr. Francisco Barbosa.

② Accionamos al Ministerio Público que es el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales, protegiendo los derechos humanos y fundamentales de todos los colombianos, artículo 277 de la Constitución Nacional, representado por la Dra. Margarita Cabello.

⑤ Accionamos a la defensoría del pueblo por ser la digna representante del pueblo colombiano, especialmente de la gente pobre de este país, artículo 282 de la Constitución Nacional, representada por el Dr. Carlos Camargo A.

⑦ Accionamos al consejo Superior de la Judicatura por ser la entidad encargada de Administrar la Rama Judicial artículos 254 - 255 - 256 de la Constitución Nacional

⑧ Accionamos al Ministerio de Justicia y del derecho, por ser el encargado de orientar y dirigir las políticas criminales del Gobierno

(4)

[9] Accionamos al Ministerio de Salud Pública, por ser la autoridad encargada de dirigir, orientar y ejecutar las políticas en salud del actual gobierno.

[10] Accionamos al Instituto Nacional Penitenciario INPE, por ser la autoridad encargada de dar cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de la pena privativa de la libertad y la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el tratamiento penitenciario y todas las medidas de seguridad en las diferentes fases de tratamiento según la ley 65 de 1993 trabajo que hace el INPE, con mucho esfuerzo, pero que muchos de ejecución de penas, no el reconocimiento necesario para que el interno obtenga los beneficios administrativos y subrogados penales.



I HECHOS

Esta tutela, esta encaminada a proteger los derechos fundamentales de petición, darle cumplimiento a las sentencias T-153 de 1998 → T-388 de 2013 → T-762 de 2015 y el auto 121 de 2018 por

⑤

Medio de las cuales la Corte Constitucional exhorta y le reitera al gobierno, el estado de cosas inconstitucionales, del sistema penitenciario y Carcelario, le indica cuales deben ser las acciones necesarias a implementar, de cara a mitigar la grave situación de la vulneración de los D.D. H.H. de las personas privadas de la libertad, sin embargo los gobiernos han hecho caso omiso, pues para ellos, esta situación no es prioritaria. Igualmente ocurre con los informes presentados por la defensoría del pueblo.

Esta complicada situación a generado masacres de internos por parte de la guardia del INPEC, como ocurrió en la cárcel La Modelo de Bogotá la masacre originada por la policía nacional en un cai, donde permitieron que unas personas privadas de la libertad murieran quemadas; esta problemática al igual que las torturas son de conocimiento de la fiscalía, pero poco hace para investigar y pedir castigo para los responsables. El panorama es desolador para todas las personas prisioneras en las cárceles colombianas, somos discriminados por El Estado Social de Derecho que viola la Constitución Nacional.



⑥

Desde hace mucho tiempo las cárceles presentan hacinamiento y un estado de cosas inconstitucionales, en lo penitenciario y carcelario, al punto de tener más del 50% de personas privadas de la libertad sometidas a dormir en el piso como animales, a sufrir la consecuencia de la humedad, un pésimo sistema de salud, la falta de agua potable las 24 horas, en todos los establecimientos carcelarios del país para atender el aseo personal.

Ante el clamor de las personas privadas de la libertad el gobierno hace caso omiso y responde con represión y tortura, convirtiendo a las cárceles en entes olvidados por el Estado, de 120.000 personas somos discriminadas, en muchos casos nos niegan nuestros derechos a reintegrarnos a la sociedad y a nuestras familias, la resocialización no es tenida en cuenta por la mayoría de jueces de Ejecución de penas, quienes se convierten en unos dictadores que manejan la normatividad jurídica a su capricho.

El estado colombiano carece de políticas orientadas para tal fin, por los gobiernos encaminadas a solucionar esta aberrante situación de vulneración de derechos Constitucionales y Derechos Humanos.

⑦

El señor presidente, en una actitud poco decorosa, mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declara la emergencia sanitaria por el covid-19 con el objeto de prevenir y controlar la propagación del virus, dándole un golpe muy duro a la gente más pobre de este país, engañándola con ayudas que muy pocas llegaron, sumado a lo anterior saca el decreto 546, para descongestionar las cárceles, dándole prisión domiciliaria a las personas con condenas muy bajas, enfermas y ancianas, pero este decreto se quedó en el papel, sirvió muy poco.

El hacinamiento en las cárceles continúa agravándose, las políticas criminales del Estado han creado cantidades de leyes represivas, compromisos políticos de turno con sus electores, que han generado un caos jurídico en la interpretación, muchas de ellas presentan ambigüedades, confunden ley lata con ley objetiva o ley sustantiva, terminando los operadores judiciales interpretando las leyes a su antojo.

Definición de ley: Jurídicamente son reglas sociales imperativas que regulan la actividad permanente del hombre a través de las

⑧

Cuales se les indican que deben ser, en que forma deben obrar, para conseguir los resultados a que aspiran, o para que su conducta sea recta.

El fin del derecho y su razón de ser es ser la justicia en la vida humana.

En este oscuro panorama podemos avistar sin elucubrar, la forma como crean la ley 1721 del 29 de diciembre de 2006, publicada en el diario oficial el 30 de diciembre de 2006, que entra a regir en la fecha, ley que modifica varios artículos de la ley 599 de 2000 así:

- con el artículo 16 modifica el artículo 345 de la ley 599 de 2000, que habla de la financiación del Terrorismo,
- con el artículo 17 modifica el artículo 323 de la ley 599 de 2000, que trata lavado de activos.
- con el artículo 18 modifica el artículo 441 de la ley 599 de 2000, que trata de la omisión de denuncia de participación.
- con el artículo 19 modifica el inciso 2 del artículo 340 de la ley 599 de 2000, que habla del concierto para delinquir.
- con el artículo 21 modifica el inciso 1 del artículo 15 de la ley 599 de 2000 que habla de territorialidad por extensión
- con el artículo 22 modifica el inciso 1 del



⑨

numeral 1 del artículo 16 de la ley 549 de 2000, que habla de extraterritorialidad.

Luego con el artículo 23 modifica los numerales 6 y 7 del artículo 5 Transitorio de la Ley 600 de 2000, que habla del conocimiento de los jueces penales de circuito especializado en primera instancia

6 De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas artículos 341 y 342 del Código Penal, del terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas 343, 344 y 345 del Código Penal

7 Del concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, narcotráfico, secuestro extorsivo grupo de justicia privada, bandas de sicarios, lavado de activos, 40 CP testaferrato art 326 CP



Con el artículo 24 modificó el numeral 20 de la ley 906 de 2004

Los jueces penales de circuito especializados en el conocimiento de la financiación del terrorismo y administración de recursos.

con el artículo 25 modificó el parágrafo 3 del artículo 324 de la ley 906 de 2004 principio de oportunidad

(10)

Declarado inexecutable por la Corte Constitucional sentencia C-095 de 2007.

Se puede atear que los anteriores artículos fueron modificados en aplicación de la ley 1121 de 2006; siguiendo con el estudio de la ley 1121 se puede ver que en el artículo 28, fuera de aclarar su vigencia y la modificación de las normas, al final de este artículo podemos ver que deroga las normas que le sean contrarias, a nuestra manera podemos decir que quedaron derogadas las leyes 599 de 2000 y la ley 906 de 2004; en la ley 599 de 2000 el artículo 64 es contrario al artículo 26 de la ley 1121 y los artículos 351, 283, 293 y otros concordantes, chocan con el artículo 26 de la ley 1121.

Lo mismo ocurren con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, como podemos ver en la sentencia C-806 de 2002, emitida en la Corte Constitucional, que trata de la libertad condicional.



Es muy importante recordar que la función central que explica la inclusión de esta figura, dentro de nuestra legislación penal, es el de la resocialización del condenado, pues es la principal finalidad

(11)

De la pena . . . Obtener su readaptación y enmienda; y esta ya se ha logrado por la buena conducta en el establecimiento carcelario.

Resultaría innecesario prolongar la duración de la ejecución de la pena privativa de la libertad.

En este sentido se puede afirmar que la libertad condicional, es uno de los logros del derecho penal, que busca evitar la cárcel a quien ya a logrado su resocialización y su rehabilitación, por lo tanto puede reincorporarse a la sociedad.

Si miramos la dogmática jurídica, nos damos cuenta que todas las normas que regulan el sistema jurídico del derecho penal, nos damos cuenta que esta lleno de ambigüedades así:

El artículo 64 del Código penal original, concede la libertad condicional a quien haya cumplido el 60% de la pena; aparece la ley 1121 de 2004, que lo modifica y exige las $\frac{2}{3}$ partes de la condena o sea el 66.6%, pero algunas autoridades judiciales exigen el 70% y otras el 80% de la pena, pero algunas se exceden y exigen la pena cumplida en su totalidad.

Si examinamos minuciosamente la normatividad, podemos avistar que en la ley 1121 de 2004, en la ley 1098 de 2006,

(12)
Exigen que los penados por los punibles relacionados con estas leyes, tengan que pagar en la cárcel la totalidad de la pena.

No entendemos en que momento la sed de justicia, pasa la frontera peligrosa, en que se convierte también en una tentación de martirio, mesquindades ineludibles que se esconden en la naturaleza humana.

El código penal Colombiano, ha sido reformado en más de 40 veces, hoy es una colcha de retazos, que impide una interpretación clara, precisa y concisa, por los operadores judiciales, lo mismo ocurre con otras normas jurídicas como la ley 600 de 2000, la ley 706 de 2004 Sistema penal acusatorio, por los yerros jurídicos en la interpretación normativa, hay mucha gente en las cárceles propiciando el hacinamiento carcelario. Cuantas tragedias humanas ha protagonizado la propia justicia, por no haber sido más equanime, por haber deshumanizado la aplicación de la ley, por no pensar sino en el delincuente y no en el hombre, por la interpretación arbitraria de las normas legales.

(13)

Cuántas personas han terminado locas,
Cuántos hogares se han destruido —

Miremos algunas leyes muy lesivas
para los internos:

La ley 733 de 2002, que con su artículo
11 le quita beneficios a las personas
condenadas por los punibles de secuestro,
secuestro extorsivo, extorsión etc.

Esta ley fue derogada tacitamente por
la ley 890 de 2004

Esta ley fue creada para aumentar
las penas como lo dice el artículo 14
y con este incremento de una tercera
parte, la fiscalía poder moverse haciendo
los preacuerdos y negociaciones en el
nuevo sistema penal acusatorio, ley
906 de 2004.

Más tarde aparece la ley
su artículo 26, que trata de las exclu-
siones o exclusiones de beneficios
administrativos y subrogados especiales.

Aparece en el mismo tiempo la ley 1098
de 2006, que en su artículo 199 niega
toda clase de beneficios a todas las
personas condenadas por delitos que
tengan que ver con menores de edad.



(14)

Se avizora un incremento punitivo, pero al aplicar la ley 906 de 2004, que estableció el nuevo sistema penal acusatorio, cuyo fin es descongestionar los despachos judiciales, tener una pronta justicia, persigue la humanización de la actuación procesal y la pena, la actuación de la solución de los conflictos sociales que generan el delito, y uno de los más importante, la participación del imputado en la definición de su caso.

Por estas razones la reducción de la pena, es una clara interpretación de los enunciados jurídicos, debe tener muy presente su finalidad, así como su coherencia, con todo el ordenamiento jurídico.


Recordemos que la función del derecho penal es la garantía del ~~ciudadano~~ ^{ciudadano} frente a la ~~potencia~~ ^{potencia} y tiene por objeto central

- civilizar
- racionalizar
- ecuanimizar
- equilibrar el ejercicio del Poder

La emisión de una sentencia condenatoria con base en una aceptación de cargos, no genera ningún tipo de reparos, lo que sí es susceptible de las responsabilidades encomendadas a la función judicial en un Estado Social de Derecho, como

(15)

El nuestro, es la relacionado con la rebaja de pena de que tratan los artículos 288 - 3, 351 - 356 - 5 y 367 - 2 del Código de Procedimiento Penal, bajo los derroteros trazados por el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, al establecer que las finalidades de los preacuerdos y negociaciones, se dirigen a humanizar la actuación procesal y la pena.

Por disposiciones de la Corte Constitucional y de la Constitución Nacional artículo 152, literales A y B, debe entenderse que los Código Penal y de Procedimiento Penal y de procedimiento penal, requieren ser expedidos bajo los rigores de una ley estatutaria, lo que por razones desconocidas nunca se cumplió en nuestro país, pues el código penal y de procedimiento Penal, fueron producto de una legislación ordinaria, lo que no implica desconocer la trascendencia del asunto,  la perspectiva de que cada vez que se intenten modificar, sobre los términos, temas objeto de modificación, en todos sus aspectos, por lo menos deben conservar la coherencia, la lógica y los fines principales, inherentes a cualquier sistema de política criminal sería, única manera de

Garantizar la igualdad, como postulado máximo pretendido por todas las formas de organización social, fundadas en el respeto a la dignidad de todos los seres humanos cual cometido prioritario del artículo 158 de la Constitución Nacional, que vela por el principio de unidad de materia en los proyectos de ley.

No obstante al margen de la naturaleza de la norma por la cual se expiden los códigos de la actividad del legislador y por supuesto, la del operador Judicial, están limitadas por unos principios rectores que son prevalentes y no deben ser desconocidos.

Bajo estos postulados es preciso entender que los títulos preliminares de la Ley es 599 de 2000 y 906 de 2004 con sus artículos 13 del C.R. C.P.P., una estructura de un de principios y garantías a la que se deben ajustar todas las demás normas de las siguientes disposiciones y que por lo tanto, tienen un estatus superior por lo que no pueden ser desconocidas por reglas que dispongan lo contrario a su esencia principal, así lo pretenda



(17)

Implementar el mismo legislador, es decir, los principios no admiten una derogatoria ni implícita, ni tácita, pues ellos deben gobernarse por la vía de la legislación expresa.

Una lectura atenta del artículo 350 y 351 del código de procedimiento penal dice:

La aceptación de cargos, en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer.

Advierte a primera vista, que la rebaja de pena no es una concesión, no una regular libertad, ni un beneficio, sino un estricto derecho.

Ni siquiera de una negociación, desde este punto de vista, las prohibiciones que contempla el artículo 1098 de 2006, no puede extenderse a la aceptación de cargos impedir que opere el contenido de la reducción de la pena, de lo contrario, no podría explicarse la efectividad de esa garantía procesal, que asumiría los visos de un abandono del juicio, que es algo completamente diferente.

Al presentarse una antinomia de carácter principal, es decir entre una regla y

(18)

Un principio rector, aquella debe ceder a éste, tal como lo ordena la Corte Constitucional en su sentencia T-406 de 1992 al señalar que Un principio constitucional se debe entender como un principio rector.

Jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o Constitucional.

Y de otro lado porque el comportar una rebaja de la pena como se define en el artículo 351 del C.P.P. no se asimila a una dación, sino que el texto citado dice "Comporta una rebaja" implica una modificación al tipo penal, desconocer su derecho a la igualdad, su derecho a participar en sus decisiones que lo afectan; y su derecho a un debido proceso, los estigmatizaría convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase, lo que es inaceptable en la actualidad en un Estado Social de Derecho. al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-718 de 2015 hace referencia al mismo tema, que no comparte un procedimiento penal adhoc para esos delitos, que generan discriminación y deshumanización inaceptable en la aplicación de la Justicia en un estado social de derecho. Si miramos la ley 1098 de noviembre 8 de 2006, en el artículo 199 en la aplicación

(19)

De los numerales 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 hace referencia a las restricciones penales artículos que chocan con el artículo 64 de la ley 599 de 2000, donde el numeral 5 de la ley 1098, al mirar este numeral quiere decir que se presenta un parametro para que el Juez de ejecución de penas vaya al artículo 64 del Código Penal y proseguir los alineamientos del artículo 68 A del Código Penal para poder aplicar el otorgamiento de libertad condicional, y dentro de las restricciones que presenta este artículo, no figura ninguna restricción para los casos de la ley 1098, como lo establece el paragrafo 1 y 2 de este artículo en mención donde presenta la no aplicación del mismo.

En lo referente con los artículos 283 y 351 de la ley 906 de 2006, situación que requiere una aclaración mediante un pronunciamiento por parte de las autoridades accionadas, con excepción del INP, el Ministerio de Salud y demás accionadas que no tengan la facultad de Administrar Justicia.

La ley 1709 del 20 de enero de 2014 Nos presenta un elemento fundamental que es la resocialización del infractor de la ley penal, brindando unos mecanismos como el sistema de redención

(20)

De pena, trabajo, estudio, valoración de la medida de seguridad (fases de tratamiento), capacitación en formación para el trabajo (SENA - Convenios con universidades).

Pero para que todo esto, a pesar de que un interno le paga a la sociedad, con la pena que cada uno cumple, todo ello para los señores jueces de Ejecución de penas, no tiene ningún sentido. La valoración de una conducta adelantada en el momento de dictar sentencia, se hace con base en los hechos que el juez fallador estipuló, en el transcurrir del tiempo aquella sentencia dictada, cambia entre la valoración de seguridad que realizan las autoridades penitenciarias, pero en algunos casos, hay personas privadas de la libertad con tiempo mayor a cinco (5) años para los señores jueces de ejecución penas el tiempo no pasa, ya el proceso de resocialización certificado por las autoridades penitenciarias, no sirve de nada, a pesar de los diferentes conceptos favorables emitidos por los diferentes centros de reclusión, donde se acredita que el reo está apto para regresar a la sociedad, más no es tenido en cuenta por los jueces de ejecución de penas y medidas

(21)

De seguridad; es decir el Estado Colombiano perdió su inversión y acción pública, porque para algunos jueces de ejecución de penas y medidas, el tiempo no ha transcurrido y el reo seguira siendo delincuente toda la vida, es. así donde las autoridades penitenciarias dan fe del cumplimiento del valor objetivo y subjetivo para el reconocimiento todos los beneficios administrativos.

Cumplimiento del Valor Objetivo = tiempo que se alcanza juntamente con el reconocimiento de redención de pena por el trabajo computado por la autoridad penitenciaria y certificado por el juez de ejecución de penas para el cumplimiento del tiempo y alcanzar dicho valor; para que reconocer redención de pena sino sirve de nada, y ya que esta certificación de tiempo resultaría algo ilógico, si para algunas condenas hoy que pagarlas en su totalidad.

Cumplimiento del valor subjetivo = tratamiento penitenciario, que conduce a la resocialización, la cual el sujeto privado de la libertad es donde cambia la naturaleza de la sentencia para así volver a reingresar a la sociedad, pero en algunos casos los jueces de ejecución de penas a través de la nueva reevaluación de la conducta punible, los privados de

(92)

La libertad, seguirán siendo delincuentes por el resto de su vida, convirtiéndose así, a cada interno en un muerto en vida, sin ninguna esperanza de volver a compartir con los otros seres humanos que gozan de libertad, pero más grave aún volver a compartir con sus seres queridos, pasando por alto así el cumplimiento de todos estos requisitos, para alcanzar que se conceda la gracia del artículo 30 de la ley en mención, que modificó el artículo 64 de la ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Art 64 Libertad Condicional.

El juez previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido los siguientes requisitos: (..)

En este artículo se avizora algo nuevo la valoración de la conducta punible para poder acceder a la libertad condicional. Es decir prima la valoración de la conducta punible sobre los otros requisitos, como valoración de alta seguridad, valoración de mediana seguridad, valoración de mínima seguridad y valoración de seguridad de confianza, o sea que prima la valoración que realiza el juez de Ejecución de penas y no la valoración

De las autoridades penitenciarias con sus diferentes conceptos de valoración de Seguridad.

En este aspecto el legislador no es claro en la valoración de la conducta punible, ni le indica al juez de Ejecución de Penas como hacerlo, se puede otear que hay dos conductas punibles:

- La Conducta que conoce el juez de conocimiento, donde se examinó, determinó y castigó esa conducta.
- La Conducta observada por el interno en el establecimiento carcelario, donde aparece la resocialización del interno, ya alcanzada de manera integral por su buena conducta, por trabajar, estudiar; lo que le permitió la valoración y cambio de fase de seguridad certificada por el INPEC. (punto que no se tiene en cuenta por los jueces de ejecución de penas), y los convierte en unos dictadores judiciales.

Por otra parte el legislador no le brinda las garantías correspondientes a los jueces de ejecución de penas y medidas, en la interpretación del parágrafo 1 del artículo 32 modificado el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, que dice: No se aplicará (...) y aún así, el juez de ejecución de penas no cumple lo establecido en dicho parágrafo

(24)

Los magistrados de la sala de casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, aprobaron varias sentencias, en el sentido de rebajar en una tercera parte las condenas, para aquellas personas a las que las condenaron aplicándoles el artículo 26 de la ley 112 de 2006 y les negaron rebaja de pena, por allanamiento a cargos, por expresa prohibición de las leyes 1121 artículo 26 y 1098 artículo 199.

Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia

- ① Sentencia 35767
MP José Leonidas Bustos
Fecha 6 - 06 de 2012
- ② Sentencia 33254
MP José Leonidas Bustos
Fecha 27 - 02 de 2013
- ③ Sentencia 41464
MP José Luis Barcelo
Fecha 13 - 11 de 2013
- ④ Sentencia 42916
MP José Luis Barcelo
Fecha 26 - 11 de 2014
- ⑤ Sentencia 43152
MP José Luis Barcelo



(25)

⑥ Sentencia 37671
MP José Leonidas Bustos
Fecha 4 - 03 de 2015

⑦ Sentencia 41777
MP Eyder Patiño Cabrera
Fecha 24 - 06 de 2015

Todas estas sentencias hablan de la inaplicación del artículo 14 de la ley 890 de 2004, que incremento todas las penas en una tercera parte.

Pedimos que se conceban esas rebajas para todas las personas condenadas por la ley 1121 de 2006, al igual que a todas las personas condenadas por delitos relacionados con menores de edad.

Pero hasta la fecha estas sentencias son letra muerta, porque ningún interno, cuenta con el dinero para pagarle a un abogado defensorista para que le reclame la menor rebaja, y de poderse hacer, esto estaría congestionando la sala de casación penal, al punto que colapsaría.

Solicitamos crear otro mecanismo legal que permita a los internos recibir esta rebaja en una forma ajil, sin tener que pasar por la revisión de proceso ante esta alta Corporación.

(16)

Recordemos que en las cárceles Colombianas, solo se encuentra detenida la gente más pobre de este país.

Citamos algunos ejemplos para que sean estudiados,

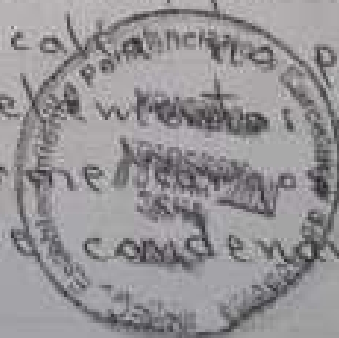
- ① Luis Fernando García Ramírez
 Proceso: 05-001-60-00-0002013-00160
 Punible: Concierto para delinquir Agravada,
 extorsión en concurso homogéneo
 tentado y consumado
 condena: 158 meses
 Administra condena: Juez Primero de Ejecución
 de Penas de Acacias
 Juez Fallador: Juez Primero Penal del circuito
 Especializado de Antioquia

Por hechos ocurridos el día 3 de julio de 2012, y capturado el 5 de diciembre de 2012, se inicia proceso penal bajo radicación en menzioni, fui condenado bajo sentencia por acuerdo F-178 del 27 de diciembre de 2013, a la pena principal de 158 meses de prisión, por los punibles como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, pero en el momento de la tipificación del acuerdo, la fiscalía separa los confines y deja extorsión por separado, pero todo globalizado dentro de un mismo radicado

(22)

Por otro lado, la fiscalía aplica el canon 11 de la ley 733 de 2002 (ley derogada) y artículo 26 de la ley 1121 de 2006, de los cuales pone doble prohibición legal de igual manera aplica el incremento del artículo 14 de la ley 890 de 2004, existiendo ya varios pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, de la inaplicación de este artículo, para aquellas penas que tienen prohibición legal de beneficios en Colombia.

La fiscalía 48 Especializada de Medellín, adscrita al Gaula militar, me imputa el delito de extorsión agravada en calidad tentada; caso ocurrido en el mes de agosto de 2012 en la tienda Yamaha de Yarumal Antioquia, donde el propietario señor Carlos Arturo Mejía Osorio, formula la denuncia penal. La Fiscalía me presento dentro del acuerdo los elementos materiales probatorios para imputarme el delito por este punible, sin embargo me condenan por el punible en mención.



(18)

2. Adalberto Escobar Escobar

Radicado : 76 147 6000 170 2014 - 01988

Radicado : 76 147 6000 000 2015 - 00033

En mi casa me imputa cargos la fiscalia por el proceso 2014 - 01988, proceso que terminó en forma abreviada por la aceptación de cargos, escrito que se tenía que anexar al escrito de acusación de conformidad con el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal y no lo hace, crea el proceso 76 147 6000 000 2015 - 00033, más gravoso, proceso que radica en el centro de servicios Judiciales de Buga y se lo asignan al Juzgado tercero Penal del circuito Especializado de Buga, proceso por el cual me dictan sentencia condenatoria

Reparos al proceso 2014 - 01988

→ Se tenía que originar acumulando 25 noticias criminales por parte de la fiscalia 2a seccional de Cartago, para poder imputar delitos cometidos en 10 eventos, ocurridos en diferentes poblaciones.

No ocurrió y no existe en el proceso

→ Para poder imputar el Punible de Enriquecimiento Ilícito de Particulares tenía la obligación de recopilar los elementos materiales probatorios

No ocurrió y no existen en el proceso

(29)

→ Lo fiscal 3 Especializada de Buga, al ver los anteriores yerro: Jurídicos crea el proceso 7614760000002015-00033 argumentando que fue el producto de una ruptura procesal del anterior proceso 2014-01988

No existe, no hay ninguna constancia y no podía existir porque el proceso 2014-01988 había terminado en forma abreviada en las audiencias preliminares y era aquí en este preciso momento donde el fiscal 2o seccional le tenía que solicitar al juez de control de garantías la ruptura procesal. No lo hace y como conclusión no existe en el proceso ninguna ruptura procesal.

En este orden de ideas se puede otear que me encuentro condenado por un proceso espurio, que no existe en la legalidad y que es obra de la mala fe de unos funcionarios judiciales, que al no tener elementos materiales probatorios para imputar el punible gravísimo Enriquecimiento Ilícito de Particulares y con el el punible de Concierto para delinquir Agravado artículo 340 inciso 2 y 3 de la ley 1121 de 2006 acuden a maniobras fraudulentas

(30)

Abuso de autoridad, prevaricatos y fraudes procesales.

Solicitó a las autoridades las siguientes copias de las piezas procesales:

- Una copia del acto por medio del cual la fiscalía 20 seccional de Cartago acumuló 25 noticias criminales en 10 eventos.
- Una copia de los Elementos materiales probatorios del punible Enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir Agravado fundamento de la condena
- Una copia de la ruptura procesal, indicando la ciudad, la fecha, ante que autoridad judicial se hace y explicandome el porque no me llevaron a la audiencia
- Una copia del acta de audiencia preliminar que debe reposar como pieza procesal
- Una copia de las llamadas interceptadas donde me vinculan a mi con todos los eventos y con el manejo de dineros.



Como esto no existe y nunca me lo pueden entregar puedo afirmar que estoy en un proceso Nulo pagando la condena que corresponde a otras personas

(1)

Petición a esta alta corte intervenir para que se resuelva mi situación y desaparezcan las mentiras y los añascos jurídicos.

Con estos procedimientos judiciales se desprestigia la administración de Justicia en un país regido por una constitución que protege derechos fundamentales, derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Es inaceptable que procesos como este sucedan en un Estado Social de Derecho



(32)

[3] César Augusto Mejía

Proceso: 18 001310070120070032000

Punible: Secuestro Extorsivo Agravado

Condena:

Administra Condena: Juez 4 de Ejecución
de penas y medidas

ora. Rut Yaned Cels

Hechos ocurridos: 15 de Julio de 2006

Privado de la libertad: 11 de agosto de 2006

El ago en auto interlocutorio del 24 de Junio de 2020, me niega el subrogado de la libertad condicional aplicando el artículo 5 de la ley 890 que reformó el artículo 64 original del Código Penal y me exige las $\frac{2}{3}$ partes de la condena, modificación que más tarde fue cambiada nuevamente a las $\frac{3}{5}$ partes de la condena como era el original.

Me aplica el artículo 30 de la ley 1709 de 2014, que establece la valoración de la conducta punible, ley que no me puede aplicar, porque no regía para el momento de los hechos. Por favorabilidad se me debe aplicar el artículo 64 original del Código Penal. El subrogado penal de libertad condicional, ha establecido el legislador como un verdadero derecho que adquiere el sentenciado siempre que cumpla los requisitos señalados en el artículo 64 ley 599 de 2000.

(33)

César Augusto Mejía continuación

La ley más favorable a procesado frente a la ley 890 de 2004, artículo 5 y la actual ley 1709 de 2014 artículo 30, en primer lugar porque es menos exigente en los presupuestos para acceder a la libertad condicional por parte del sentenciado y por tanto menos aflictiva, ya que solo se requieren que se hayan cumplido las $3/5$ partes de la pena, en contraposición con la ley 890 de 2004 que impone el cumplimiento de las $2/3$ partes de la pena, más una serie de exigencias de la ley 1709 de 2014 artículo 30 que si bien requiere el cumplimiento de las $3/5$ partes consagra otro requisito consistente en demostrar el arraigo familiar y social, la Honorable Corte Suprema de Justicia con respecto al tema en cuestión:

Dado que el asunto planteado, ya fue objeto de análisis por parte de la Sala IV de Casación Penal cuando en pleno conocimiento de las acciones de tutela y con posterioridad a las resoluciones de tutelas, los casos adelantados para amparo de la ley 600 de 2000 es aplicar el artículo 64 de la ley 399 de 2000 en su versión original por resultar más favorable a los intereses del condenado, por tal razón se debe aplicar siempre lo que haya dicho el legislador, no

(34)

Lo que a bien tenga idear el funcionario judicial, solicite mi libertad condicional en junio de 2020, me la niega el señor juez impugno el fallo, en este momento se encuentra en la sala de decisión penal del tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, lleva 7 meses sin resolver una libertad condicional.

Petición a la Honorable corte que se me resuelva lo peticionado de libertad Condición aplicando la sentencia del 3 de octubre de 2006 radicado 274181 de la Sala de Casación Penal La misma en que se apoyó el señor Juez Primero de Ejecución de penas de Florencia Caquetá para concederle la libertad Condicional al señor Alexander Sierra Castro el 4 de agosto de 2020.

4: Bernay Sierra Castro

Proceso: 200700199 Ley 600 de 2000

Ponible: Secuestro Extorsivo y Hurto

condena: 320 meses

Administra la condena: El ~~Juzgado~~ Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de la ciudad de Acasías

El Agro, me niega la libertad condicional por no cumplirse con uno de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Penal aplica el artículo 3 de la ley 890 de 2004

(35)

y a su vez, modificado por el artículo 30 de la ley 1709 del 20 de enero de 2014, conducta punible.

Como se puede avizorar la ley 1709 no regía para el tiempo en que ocurrieron los hechos y por favorabilidad, se debe aplicar la ley que más me favorece en este caso la ley 599 de 2000, artículo 64, original en atención a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia respecto al tema en cuestión:

Dado que el asunto planteado en esta ocasión ya fue objeto de análisis por parte de la Sala de Casación Penal, cuando en pleno conocimiento de las acciones de tutelas y que a posterioridad por dos de sus salas de decisión de tutelas, para concluir que lo debido en estos casos, los adelantados al amparo de la ley 600 de 2000, es aplicar el artículo 64 de la ley 599 de 2000, en su versión original por resultar más favorable a los intereses del condenado, se reiteran los argumentos expuestos en sucesiones anteriores, en efecto en la sentencia de tutela del 3 de octubre de 2006, radicado 274181 de la Sala de Casación Penal.

Con el mismo proceso se encuentra mi hermano, Alexander Sierra Castro

(36)

Y en aplicación de esta normatividad jurídica,
el Dr. Cristian Fernando Erquiyo Montagot,
Juez Primero de Ejecución de Penas de
Florenia - Caguetá, le concedió la libertad
condicional el 4 de agosto de 2020
Anexo documentos



Pretenções

② Solicitamos al juez constitucional amparar y tutelar de manera integral los derechos fundamentales.

→ Derecho fundamental al debido proceso
artículo 29 de la Constitución Política

Este derecho es vulnerado por darle aplicación a la ley 599 de 2000, ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004 y ley 1709 de 2014, sabiendo que la ley 1121 en su artículo 28 las derogó por ser contrarias a esta ley en mención.

El artículo 64 de la ley 599 del 2000 concede la libertad condicional a los que cumplan una serie de requisitos, pero el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, así se cumplan los requisitos del artículo 64 de la ley 599, no concede ningún beneficio administrativo, siendo así este último contrario de acuerdo al artículo 28 de la ley 1121 de 2006.

De igual manera siguiendo la línea del artículo 26 de la ley 112 es contrario a los artículos 351 - 471, de la ley 906 de 2004.

De igual manera lo mismo acontece al artículo 480 de la ley 600 de 2000. Sucesivamente encontramos otro caso que nos conlleva al mismo punto con el artículo 30 de la ley 1709 de 2014.

(28)

Todas las anteriores viñen de fondo con la ley 1121 de 2006, en su artículo 26 que prohíbe de manera tajante todo beneficio, así podemos dar fundamento al artículo 28 de la ley 1121 de 2006

→ Acceso a la Administración de Justicia

Es vulnerado por los jueces de control de garantías, los jueces de conocimiento, jueces de Ejecución de penas, tribunales, corte Suprema de Justicia y fiscalía General de la Nación, al darle aplicación a unas leyes que ha derogado el artículo 28 de la ley 1121 de 2006 por ser contrarias a estas conforme a su legislación

→ Derecho a la Igualdad

Es vulnerado porque no estamos compartiendo en sociedad como gozan los otros seres humanos en libertad; por estar privados de la libertad con unas condenas ejecutoriadas por leyes que están derogadas.

② Solicitamos al juez constitucional que decrete de manera inmediata la nulidad procesal de todos los fallos y procesos realizados a partir del 30 de diciembre de 2006, ya que el artículo 28 de la ley 1121 de 2006 derogó las leyes 579 de 2000, 600 de 2000 y ley 906 de 2004, por ser contrarias a esta misma.

(39)

- ③ Solicitamos al Juez Constitucional decretar la escarcelación masiva de todas las personas condenadas a partir de la derogatoria hecha por la ley 1121 de 2006 en su artículo 28, ya que el sistema penal acusatorio queda impropio al igual que el código represor ley 599 de 2000, ya que todos los procedimientos judiciales se encuentran de manera ilegal.
- ④ Peticionamos que se resuelva de fondo la derogatoria de las leyes 599 de 2000, 600 de 2000 y ley 906 de 2004, ya que el artículo 28 de la ley 1121 de 2006 lo promulga de acuerdo a la legislación.
- ⑤ Peticionamos al señor Juez constitucional, ordenar a quien corresponda darle cumplimiento de manera integral, a los conceptos favorables que expiden las autoridades penitenciarias, donde certifiquen que el infractor de la ley penal, está preparado para regresar a la vida en sociedad por haber dado cumplimiento al estricto mecanismo del sistema progresivo de resocialización, en cuanto a las conductas, ya fue examinada, valorada y condenado; pasa inmediatamente a cumplir un proceso dentro del sistema progresivo con un

(40)

tratamiento específico por el INPEC, los Jueces de Ejecución de penas hacen caso omiso a lo estipulado en la ley 65 de 1993. Desconociendo la complicado labor desempeñada por el INPEC en las fases de tratamiento.

⑥ Solicitamos al juez constitucional darle el trámite requerido a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional, donde se han pronunciado sobre cosas de inconstitucionalidad carcelaria, ordenando a quien le corresponda darle el cumplimiento a ellas, al igual que a todos los informes y recomendaciones hechas y presentados por la Defensoría Nacional del Pueblo.

⑦ Hacemos un llamado a la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la Honorable Corte Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura para que implementen los mecanismos requeridos para ordenar a los jueces de Ejecución de penas y medidas para que cumplan con las leyes más favorables para los internos, al igual que dar cumplimiento a todas las sentencias de las honorables cortes en la aplicación de leyes más favorables para que los internos puedan recuperar su libertad más rápido, sin obligarlos a pagar

④ La totalidad de la condena, ya que no existe ninguna ley que afirme que los condenados por determinados delitos tienen la obligación de pagar la totalidad de la pena.

⑤ Peticionamos al Juez constitucional que estudie y resuelva los casos que le presentamos como ejemplos de las vulneraciones de derechos por parte de las autoridades regionales, encargadas de Administrar Justicia

- Luis Fernando García Ramírez
- César Augusto Mejía
- Adalberto Escobar Escobar
- Berney Sierra Castro

⑥ Solicitamos al Juez constitucional darle aplicación a las sentencias 3325 del 27 de febrero de 2013, 37671 del 4 de marzo de 2015, sentencia 42916 del 11 de noviembre de 2014, sentencia 37262 del 6 de junio de 2012, sentencia 41777 del 13 de noviembre de 2013, sentencia 43152 del 11 de febrero de 2015, sentencia 41777 del 26 de junio de 2015 y buscar un mecanismo más accesible para que los internos puedan tener el mismo derecho

(42)

A las rebajas establecidas en estas sentencias por inaplicación del artículo 14 de la ley 890 de 2004.

Fundamento de derecho

Fundamentamos esta acción constitucional en el artículo 86 Superior y en el artículo 23 Superior, Decreto 2591 de 199

Competencia

Artículo 37 primera instancia

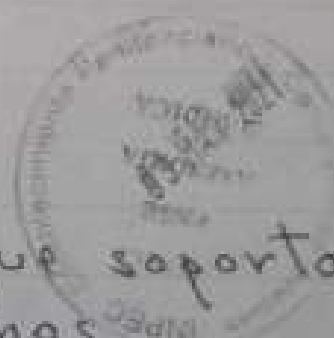
Juramento

Los internos firmantes manifestamos, bajo la gravedad del Juramento, que no hemos presentado otra acción constitucional por los mismos hechos y derechos.

Anexos

Anexamos documentos que soportan las peticiones de los internos

Notificaciones



(43)

Notificaciones

La parte accionada recibe notificación en sus respectivas oficinas o despachos.

Los accionantes recibimos notificaciones en el patio 4 de la Cárcel de Acacias

Correo electrónico Fdo garcia1004 @ gmail. com

Escribimos nuestros nombres, nuestros números de cédulas y nuestras huellas, como garantía de autenticidad



Luis Fernando García Ramírez

CC . 1059 981 940

TD 12139

Pabellón N° 4 CPM SACAS Acacias Meta.

Adalberto

Adalberto Escobar E.

CC 10243297

TD 14810

Pabellón 4 CPM SACAS Acacias - Meta



CUI: 1001-31-007-01-2007-00320-01
 T. S. J. 2016-00142
 Objeto: Solicitar excusión de responsabilidad, prisión, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones.
 Fecha: 1 de mayo de 2006
 Ciudadano: Cesar Augusto Mejia Molano
 Hora: 10:00 am y más de 2006 SMLMV
 Lugar: Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá.
 Representante: Excmo. Sr. Jefe y Carcelario Jefe de la Pabellón de Mujeres de Acacías, Meta
 Descripción: Expediente de prisión y alega libertad condicional
 Total Páginas: 114



Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia

JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACÍAS, META

Junio veintiocho (28) de dos mil veinte (2020)

ASIENTO

Procede el Despacho a resolver las solicitudes de subsecución de fecha de captura, reducción de pena y libertad condicional, presentada por el ciudadano **CESAR AUGUSTO MEJIA MOLANO**, conforme a la documentación allegada por la dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Incluye Pabellón de Mujeres de Acacías, Meta, lugar en donde se encuentra privado de la libertad.

ANTECEDENTES

CESAR AUGUSTO MEJIA MOLANO, presenta la siguiente situación jurídica:

Por hechos ocurridos el 15 de julio de 2006, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, mediante sentencia de marzo 31 de 2008, a la pena de **360 meses de prisión y multa de 7.000 SMLMV**, por los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones. No se concedieron subrogados penales, ni mecanismos sustitutivos de la pena.

En razón de este asunto se encuentra privado de la libertad desde el 11 de agosto de 2006 a la fecha, lo que suma que a la fecha ha descontado 166 meses y 13 días.

A la fecha se le ha reconocido como reducción de pena 51 meses + 29, 18 días.

El presente documento es una copia de la versión original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, D.C., y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones.



Procuraduría General de la Nación
Oficina de la Procuraduría General de la Nación
Bogotá, D.C.

ACUERDO DE UNIÓN DE FUERZAS DE PENAL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA LEY, S.T.A.

En el día veintinueve (29) de mayo del año 2019.

CONVITE

Por medio del presente se convoca a los señores de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., a la reunión de trabajo que se celebrará el día veintinueve (29) de mayo del año 2019, a las 10:00 horas, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C.

ACUERDO DE UNIÓN

ACUERDO DE UNIÓN DE FUERZAS DE PENAL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA LEY, S.T.A.

En el día veintinueve (29) de mayo del año 2019, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

En el día veintinueve (29) de mayo del año 2019, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

En el día veintinueve (29) de mayo del año 2019, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

CONVITE

En la reunión de trabajo.

En Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de mayo del año 2019.

El presente documento es una copia de la versión original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, D.C., y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones.

En el día veintinueve (29) de mayo del año 2019, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado Civil	Ocupación	Profesión
...

En la reunión de trabajo.

En la reunión de trabajo, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

En la reunión de trabajo.

En la reunión de trabajo, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

En la reunión de trabajo, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

En la reunión de trabajo, se celebró la reunión de trabajo que se convocó por el presente, en la sede de la Unión de Fuerzas de Penal y Sistemas de Seguridad de la Ley, S.T.A., ubicada en la Carrera 140 No. 100-10, Bogotá, D.C., a las 10:00 horas.

En Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de mayo del año 2019.

antes de la ley 1709 de 14 2 junio de 2020 Aplica la ley 1709 de 2014 artículo 30 la gente sale de las cárceles con las 3/5

de la Ley, y mucho menos el hacer comportamientos y reaccionar en la sociedad y de los derechos individuales, así que puede considerarse que el proceso de socialización hasta la fecha permitiera que tales comportamientos hayan cambiado en el país al hacer comportamientos diferentes al tener del penal y que los realizando actividades saludables para relaciones de paz, a los cuales se le reconoce una gran importancia con su realización. Sin embargo, la pena aún no se cumple con las fines previstos, por tanto, este aspecto no se encuentra resuelto, más por lo que se busca el otorgado pretensión, en que se haga alcanzar al sentido de los demás requisitos.

Así las cosas, al no cumplir con la primera condición de prevalencia, para acceder a la libertad condicional de acuerdo a la norma cited, resulta lícito la aplicación de los demás requisitos. No obstante, pues conforme con el simbolado, se establece el tiempo descontado a la fecha:

Requisitos	Meses	Días
Tiempo descontado de manera lícita	196	71,00
Requisitos temporales con penalidad	21	79,18
Requisitos temporales de la Ley	21	69,00
Total	218	21,18
Total concurriendo días a penas	218	21,18

En consecuencia, queda que a la fecha el periodo ha descontado otros meses y tiempo resultando un total de 218 meses y 21,18 días, este significa que se cumple con el límite exigido (21) meses de la prima, en consecuencia, habrá de seguir por la satisfacción de la prevalencia de la conducta pacífica.

Desahogado el primer requisito constitucional al señor CESAR AUGUSTO MEJIA MOLANO conforme a lo señalado en precedencia.

OTRAS DECISIONES

1. **Revisión:** Se advierte que para la revisión en general al penado, se debe aplicar el artículo 17 numeral 2º del Decreto SUPLENTE 21 de 1974 (17 de marzo de 2002), dada la situación de guerra civil declarada por el Gobierno Nacional (CON 11-18), así como las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, entre por lo que se remite la providencia, diligencias y expedientes a la Oficina Judicial del Penal, para que se realicen las actividades con el debido cuidado, además que según dicho numeral, se remite al Jefe de la Oficina de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de ACACIAL MEY, para que se realice la correspondiente gestión.

Se remite a los Jueces y Juezas penales por el medio más adecuado.

Dadas estas de sus decisiones en la Oficina Judicial, para que cumpla con la Parte Segunda del artículo 17.

Por lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAL MEY**.

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER como indemnidad de pena a favor del señor CESAR AUGUSTO MEHA NICOLANO, los 221 horas de trabajo, tiempo equivalente a 94 (94) horas sueltas (7) días, como parte del cumplimiento de la pena.

SEGUNDO: NEGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL, acordada por el abogado CESAR AUGUSTO MEHA NICOLANO conforme lo establecido en la penitencia de esta providencia.

TERCERO: DENE cumplimiento en el adquire de esta decisión final.

CUARTO: CONTRA lo presente dentro de los plazos los recursos de reposición y apelación.

NOTIFICASE Y CUMPLASE

RUT VANDERCELIN CASILLAS

JUZ



ACTA DE COMPROMISOS

CAUCIÓN JURATORIA

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN	73001-31-07-002-2007-00099
NI	(Acumulado) 24250

En la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, hoy 04 de agosto de 2020, compareció el señor ALEXANDER SIERRA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.798.557 con el fin de suscribir diligencia de compromiso, conforme a lo dispuesto mediante Auto Interlocutorio No. 1130 del 04 de agosto de 2020, por medio del cual se le concede Libertad Condicional y se somete a un periodo de prueba de 86 MESES Y 4.5 DÍAS. Así mismo, el suscrito Juez le impuso las obligaciones del artículo 65 del Código Penal:

1. Informar todo cambio de residencia.
2. Observar buena conducta. (No cometer nuevos actos delictivos).
3. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
4. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigila la ejecución de la pena.
5. Efectuar el pago de los perjuicios en cuantía de \$450.000, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la suscripción de la diligencia de compromiso.
6. Cumplir el aislamiento preventivo domiciliario por el término de catorce (14) días, conforme a lo establecido por las autoridades administrativas sanitarias del país.

El beneficiado manifiesta que cumplirá con las obligaciones contraídas y que fijará su residencia en la _____
 Teléfono No. _____. Advertido del contenido del artículo 66
 ibidem y agotado el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por
 quienes en ella intervinieron.

ALEXANDER SIERRA CASTRO
 Comprometido

• **REDENCIONES A TENER EN CUENTA**

FECHA REDENCION	MESES	DIAS
27 de noviembre de 2012	11 meses	20.5 días
14 de mayo de 2013	6 meses	1 día
03 de agosto de 2014	6 meses	26 días
03 de marzo de 2015	3 meses	12.5 días
19 de febrero de 2016	3 meses	20.5 días
11 de octubre de 2016	3 meses	21 días
03 de abril de 2017	2 meses	19.5 días
24 de mayo de 2017	1 mes	19 días
07 de diciembre de 2018	6 meses	20 días
24 de enero de 2019		23 días
Redención anual	1 mes	0.5 días
Total	42 meses	190.5 días

• **TOTAL DE PENA CUMPLIDA**

En síntesis, sumados los anteriores por los meses de detención física -185 meses y 15 días- y redención de pena -48 meses y 10.5 días-, tenemos que ALEXANDER SIERRA CASTRO ha descontado de la pena de prisión impuesta dentro de esta causa, un total de **233 MESES Y 25.5 DIAS**.

• **DE LA DOCUMENTACIÓN**

La oficina jurídica del IP Las Heliconias allega la siguiente documentación:

- Cartilla biográfica.
- Resolución No. 0579 del 10/05/2020 en la cual se emite concepto "favorable" para libertad condicional.

• **DE LA LIBERTAD CONDICIONAL**

El subrogado panel de la Libertad Condicional ha sido establecido por el legislador como un verdadero derecho que adquiere el sentenciado siempre que cumpla los requisitos señalados en el art. 64 de la Ley 599 de 2000, ley más favorable al procesado frente a la Ley 894 de 2004 art. 5º y la actual Ley 1709 de 2014 art. 30, en primer lugar porque es menos exigente en los presupuestos para acceder a la Libertad Condicional por parte del sentenciado y por tanto menos afectiva para el interno, ya que solo requiere que se hayan cumplido las 5/5 partes de la pena en contraposición con la Ley 894 de 2004 que impone el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena más una serie de exigencias y la Ley 1709 de 2014 art. 30, que si bien regula el cumplimiento de las 3/5 partes consagra otro requisito consistente en demostrar el arraigo familiar y social, su concesión estará supeditada a la reparación a las víctimas o el aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado, limitándose así menos el derecho fundamental de la libertad personal del sentenciado ALEXANDER SIERRA CASTRO, y en segundo lugar porque para la fecha de los hechos por los cuales fue procesado y considerado el señor SIERRA CASTRO en esta causa, aún no había comenzado a regir la Ley 994 de 2004 en el Distrito Judicial de Bogotá -01 de enero de 2017-, toda vez que los hechos ocurrieron el 11 de mayo de 2015.

Es pertinente resaltar que este Despacho aplicará para este caso en concreto las exigencias del artículo 64 original de la Ley 599 de 2000, en atención a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia respecto al tema en cuestión:

"... Dado que el asunto planteado en esta causa ya fue objeto de análisis por parte de la Sala de Casación Penal cuando en pleno consejo de los árbitros de cuatro y con posterioridad por dos de sus Señores de Despacho de Turbaco, para concluir que se debía en estas cosas los adelantados al régimen de la Ley 599 de 2000, es aplicable el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 en su versión

> Cfr. Sala de Casación Penal -Sala de Órbita de Turbaco No. 1, S.P. Augusto J. Baez Olaverri. Fallo aprobado mediante auto No. 595 del 15 de diciembre de 2018.

original por resultar más favorable a los intereses del condenado, se reiterarán los argumentos expuestos en ocasiones anteriores.

En efecto, en la sentencia de tutela del 3 de octubre de 2006 (radicado 27418) la Sala de Casación Penal sostuvo:

"...razón le asiste al accionante cuando cuestiona la decisión adoptada por el juzgado y el Tribunal, porque, si bien es cierto, que este fue sentenciado por el delito de Extorsión en vigencia de la ley 733/02, norma que además de la pena prisión estipulaba la de multa, también lo es, que al ser derogado tácitamente el artículo 11 de la referida disposición por el artículo 5° de la ley 890 de 2004, norma que permite la concesión de la libertad condicional para todos los delitos, es indiscutible, que para el sentenciado L...I resulta más favorable la aplicación del artículo 64 de la ley 599 de 2000 en su versión original, que la modificación introducida por la ley 890 de 2004, en la medida en que la norma promulgada no contemplaba la exigencia del pago de la multa para efectos de la concesión de la libertad condicional, como sí lo hace la reforma anunciada.

En este orden de ideas, nada se opone a aplicar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Política, puesto que dicho precepto ordena aplicar de preferencia en materia penal la ley permisiva o favorable, situación que encuentra perfectamente en el caso hoy sometido a decisión, porque, se recuerda, en la actualidad se exige para la concesión de la libertad condicional el pago de la multa impuesta como pena, lo cual no sucedía antes de la modificación introducida con la ley 890; entonces, si es procedente aplicar por favorabilidad este dispositivo al libelista, puesto que, se repite, al quedar derogado el artículo 11 de la ley 733/02, los subrogados y beneficios penales a aplicar para tales eventos deben regirse por lo dispuesto en las normas vigentes al momento de emitirse el fallo, máxime si estas son más favorables que las expedidas con posterioridad y que regulan los mismos aspectos.

Sobre el tema de la favorabilidad en materia penal, resulta viable traer a colación lo dicho por esta Sala de Casación en fallo emitido en el año 2003 dentro del proceso No. 16-182, oportunidad en la cual se expresó: "De otra parte, al abordar el tema de la favorabilidad, la Legislatura ha resuelto que las normas penales y de procedimiento penal se pueden combinar o conjugar, entre sí y unas con otras, en búsqueda de la regulación más favorable al implicado, bajo la condición que se aplique siempre lo que haya dicho el legislador, no lo que a bien tenga idear el funcionario judicial".

Así las cosas, debe concluirse sin lugar a equívocos, que la negativa a conceder al interno accionante la libertad condicional bajo el argumento de que no ha sufragado aún la multa impuesta desconoce los derechos del actor, máxime que en tales eventos el Estado cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción coactiva con miras a hacer efectiva dicha pena conforme lo previsto en el artículo 41 de la ley 600 de 2000. En consecuencia, se concederá el amparo impetrado..." Subraya la Sala...".

Dicha postura ha sido acogida igualmente por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en sentencia del 13 de agosto de 2012, M.P. Jhon Roger López Gartner².

Art. 64 Ley 599 de 2000:

"...Libertad Condicional. El juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.

"No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena.

"El periodo de prueba será el que falta para el cumplimiento total de la condena..."

Del anterior texto se deduce que el Legislador dispuso el cumplimiento de unos requisitos de carácter objetivo - que se concreta en que la pena impuesta haya sido privativa de la libertad y que el sentenciado haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de ésta - y otro de carácter subjetivo - que comprende, exclusivamente, el comportamiento del sentenciado durante su estancia en la prisión que se pueda deducir que el interno no necesita continuar privado de la libertad; lo anterior, para la

² Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Rad. 20040109-01.

4

consecución de los fines de la pena. Es el mismo Legislador quien dispuso que el requisito subjetivo ha de corroborarse a través de los medios establecidos en el art. 480 de la Ley 600 y ahora el art. 471 de la Ley 906.

Por tanto, habiéndose determinado que hasta la fecha ALEXANDER SIERRA CASTRO ha descontado la cantidad de 233 meses y 25.5 días de prisión y siendo la pena de prisión impuesta -acumulada- de 320 meses, sus 3/5 partes corresponden a 192 meses, por lo que SE CONFIGURA para este momento el requisito objetivo de tiempo que se requiere para la Libertad Condicional.

En cuanto al requisito subjetivo, se puede apreciar de los documentos aportados por el Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de la ciudad, que no existe elementos de juicio de mal comportamiento durante el tiempo que ha permanecido en prisión intramural por cuenta de la presente causa; habiéndose expedido resolución "favorable" por el Director del Establecimiento Carcelario Las Heliconias y cuya conducta durante todo el tratamiento penitenciario ha sido calificada en el grado de "ejemplar y buena" por parte de la correspondiente autoridad penitenciaria, y no le han sido impuestas sanciones disciplinarias según la cartilla biográfica del interno, además el condenado ha dedicado su tiempo en actividades y laborales estudiantiles en cumplimiento de su proceso de resocialización, por lo que el despacho considera que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena, teniéndose así cumplido este requisito.

Respecto a la cancelación del pago de perjuicios solidarios en \$450.000, se advierte al señor ALEXANDER SIERRA CASTRO que deberá cancelarlos dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la suscripción de la diligencia de compromiso.

Así las cosas, se otorgará al condenado ALEXANDER SIERRA CASTRO, la libertad condicional, quien se somete a un periodo de prueba de 80 MESES Y 1.5 DIAS, debiendo prestar caución juratoria, esta atendiendo la emergencia sanitaria que fue declarada en el país, y con el único fin de materializar el beneficio judicial concedido lo más pronto posible; la misma se tiene por prestada con la suscripción de la diligencia de compromiso conforme a lo previsto en el artículo 65 del Código Penal.

LA LIBERTAD SE LE OTORGA SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SE DEJARÁ A SU DISPOSICION, ya que no existe en el proceso constancia al respecto.

• AISLAMIENTO PREVENTIVO DOMICILIARIO

Como quiera que, ante la identificación del COVID-19 desde el pasado 07 de enero, se declaró que brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPI) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el Gobierno Nacional ha venido implementando diferentes medidas en aras de mantener los casos y contactos controlados. De acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el COVID-19, se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de personas infectadas; la sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desensadenar en una neumonía grave e incluso la muerte. La OMS declaró el 11 de marzo de los corrientes que, el brote de COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación.

En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la "Emergencia Sanitaria" en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Mediante Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, dicha cartera ministerial prorrogó la "Emergencia Sanitaria" hasta el 31 de agosto de 2020.

Por ende, como quiera que en la presente decisión se concede el beneficio de la libertad condicional al PPI ALEXANDER SIERRA CASTRO, considera el Juzgado necesario atendiendo los lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente a la pandemia COVID-19 en Colombia, emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, PREVENIR al sentenciado ALEXANDER SIERRA CASTRO, para que una vez se

Concedo Libertad Condicional
Proceso No 2007-00089
Nl. 24250

Condenado: ALEXANDER SIERRA CASTRO

materialice su derecho fundamental a la libertad, inicie la fase de aislamiento preventivo domiciliario por el término de catorce (14) días, conforme a lo establecido por las autoridades administrativas sanitarias del país.

Del mismo modo, se ordenará COMUNICAR la presente decisión a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, para que adelante el seguimiento al aislamiento preventivo domiciliario del ciudadano ALEXANDER SIERRA CASTRO, conforme a sus competencias.

Por lo expuesto, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER a ALEXANDER SIERRA CASTRO la LIBERTAD CONDICIONAL solicitada, quien se somete a un periodo de prueba de 86 MESES Y 4.5 DÍAS, debiendo prestar caución juratoria, y suscribir diligencia de compromiso de que trata el artículo 65 del Código Penal, incluida la de permanecer por 14 días en aislamiento preventivo domiciliario, conforme se señaló en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Suscrita la diligencia de compromiso, LIBRESE BOLETA DE LIBERTAD a favor de ALEXANDER SIERRA CASTRO, ante el Director del Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia. No obstante, la LIBERTAD SE LE OTORGA SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SE DEJARA A SU DISPOSICION, ya que no existe en el proceso constancia al respecto.

TERCERO: ADVERTIR al condenado ALEXANDER SIERRA CASTRO, que deberá efectuar el pago de los perjuicios en cuantía de \$ 30.000, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la suscripción de la diligencia de compromiso.

CUARTO: PREVENIR al sentenciado ALEXANDER SIERRA CASTRO, para que una vez se materialice su derecho fundamental a la libertad, inicie la fase de aislamiento preventivo domiciliario por el término de catorce (14) días, conforme a lo establecido por las autoridades administrativas sanitarias del país.

QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, para que adelante el seguimiento al aislamiento preventivo domiciliario del ciudadano ALEXANDER SIERRA CASTRO, conforme a sus competencias.

SEXTO: COMISIONAR a la OFICINA JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS, a efectos de notificar la presente decisión al sentenciado ALEXANDER SIERRA CASTRO, quien se encuentra recluso en dicho Centro de Penitenciario.

SÉPTIMO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia
 Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
 Medidas de Seguridad de Florencia - Caquetá

BOLETA DE LIBERTAD No. 128

Florencia - Caquetá, 04 de agosto de 2020

Doctor

CARLOS ALBERTO CUENCA ALMARIO

Director Establecimiento Penitenciario Las Heliconias

Florencia - Caquetá

<u>NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN</u>	73001-31-07-002-2007-00099 (Acumulado)
<u>NL</u>	24250
<u>DELITO</u>	(I) SECUESTRO EXTORSIVO EN CONCURSO HOMOGÉNEO (II) CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO
<u>CONDENADO</u>	ALEXANDER SIERRA CASTRO
<u>C.C. No.</u>	79.798.557
<u>FECHA DE NACIMIENTO</u>	
<u>NATURAL</u>	
<u>PADRES</u>	
<u>MOTIVO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL</u>	
<u>AUTO INTERLOCUTORIO No.</u>	1130
<u>FECHA</u>	04 de agosto de 2020
<u>PERIODO DE PRUEBA</u>	86 MESES Y 4,5 DÍAS
<u>AUTORIDADES QUE CONOCIERON</u>	<u>RADICADO No.</u>
FISCALIA 7 ESPECIALIZADA DE IBAGUE	2007-00099- -
JUZ. 002 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE IBAGUE	2007-00099- -
JUZ. 002 PENAL DEL CTO ESPEC. ADJUNTO DE DESCONG. DE IBAGUE	2007-00099- -
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE IBAGUE	2007-00099- -
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA	2007-00099 / NL 24250

OBSERVACIONES: LA LIBERTAD SE LE OTORGA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EL CUAL SE DEJARÁ A SU DISPOSICIÓN.

Atentamente,


CRISTIAN FERNANDO ARQUERO MONTAGUT



Acacias (Méx). 8660 (DT) de septiembre de dos mil veinte (2020)

CLAVE
PROCESO NO

7907-03700 (AUTOMATIZADO 2009-00003)

CONDENADO
DELITO
ADJUNTO
INTERLOCUTORIO

2012 03148
Ley 85 de 1993 - 1a. Fes
BERNEY SIERRA CASTRO
SECUESTRO ENTORCEROS Y HURTO CALIFICADO AGRAVADO
REQUISITO REDENCIÓN DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL
VISO

ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a pronunciarse respecto de la solicitud de redención de pena y libertad condicional del condenado **BERNEY SIERRA CASTRO**, quien cumple pena acumulada de 320 meses de prisión y se encuentra privado de la libertad desde el 11 de mayo de 2005, a la fecha de esta decisión.

PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Es procedente el reconocimiento de horas de trabajo, estudio y/o enseñanza para redención de pena, atendiendo los requisitos del artículo 101 de la Ley 85 de 1993.

¿Con los elementos allegados es posible establecer una valoración de la conducta diferente a la ya establecida en decisión anterior que negó la libertad condicional solicitada?

DE LA REDENCIÓN DE PENA

Se allegó el siguiente certificado:

- 17815519 con 184 horas en enseñanza, durante el 01 de mayo al 30 de junio de 2020

Las 184 horas en enseñanza, se validarán para redención de pena, en consideración a que la actividad y la conducta se encuentran dentro de los demostraros legales, por año se redimirá la pena en 23 días (184/8 factor enseñanza)

TIEMPO	MESES	DÍAS
Tiempo físico	183	026.0
Tiempo reconocido en proceso ya ejecutado	008	026.0
Redención reconocida	053	025.9
Redención por reconocer	000	023.0
Total	244	100.8
Conversión de días a meses	247	010.8

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Mediante autos interlocutorios 2260 del 26 de septiembre de 2017 y 2695 del 25 de septiembre de 2018, este Juzgado se ocupó de resolver la solicitud de libertad condicional del condenado **BERNEY SIERRA CASTRO**, negándole al palatino panel, al no cumplir con uno de los requisitos establecidos en el artículo 84 del código penal, modificado por el artículo 2º de la Ley 893 de 2004 y a su vez modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 del 28 de enero de 2014, esto es, al obtener un resultado negativo de la valoración efectiva a la conducta penal.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Vilavendo, mediante provido del 21 de junio de 2018, al confirmar la decisión del 25 de septiembre de 2017, indicó:

Y... Indícase que los juzgadores señalan en las sentencias condenatorias que las conductas cometidas por **BERNEY SIERRA CASTRO** eran graves, pues aparta de



lesionar el bien jurídico del patrimonio económico, se colocó en inminente riesgo la vida de varias personas que se encontraban en la residencia en el momento del acontecer delictual, quienes estuvieron en desventaja por la presencia de armas de fuego, intimidaciones y amenazas a la vida e integridad personal por parte de los encartados. También se resaltó la suma gravedad del secuestro extorsivo por cometerse sobre un menor de escasos 4 años de edad, lo cual denotaba el máximo irrespeto por los derechos de los niños, sujeto de especial protección por el Estado y la sociedad."

Así mismo, la referida Corporación, mediante proveído del 02 de julio de 2020, al confirmar la decisión del 25 de septiembre de 2018, indicó:

"[...] el juzgador señaló en la sentencia condenatoria del 24 de julio de 2009 que la conducta cometida por **Berney Sierra Castro** era grave pues afectó bienes jurídicos de diferentes personas, entre ellas un menor de solo cuatro años de edad, sobre quienes ejerció actos de violencia y les privó de su derecho a 'la libre locomoción', lo que demostró irrespeto por los derechos ajenos, en especial por el niño, sujeto de especial protección constitucional.

Así las cosas, acertó el A quo al negar al sentenciado la libertad condicional solicitada..."

En consecuencia, al no contar actualmente con elementos nuevos de juicio, que permitan establecer una valoración de la conducta diferente a la ya establecida, pues la situación del penado no permite conceder la libertad solicitada, y en respeto al principio de la seguridad jurídica de las providencias ejecutoriadas, este despacho deberá estarse a lo resuelto sobre el tema en los interlocutorios en cita, atendiendo lo decantado por la jurisprudencia, cuando quiera que se repiten pretensiones fundamentadas en supuestos facticos y jurídicos similares y decididos judicialmente, así lo refirió la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en auto de 26 de enero de 1998:

"...no procede la tramitación de solicitudes que repiten cuestionamientos anteriores, respondidos en forma oportuna y debida, cuando se basan en la misma realidad probatoria y reiteran identidad de razonamiento jurídico"

O el pronunciamiento de la misma Alta Corporación en sede de Tutela, Rad. 37488 de julio 15 de 2008, que señaló:

"...Resulta entonces, ajustados al ordenamiento los autos atacados por cuanto, se reitera, lo solicitado ya había sido resuelto y no es viable debatir reiteradamente asuntos jurídicamente consolidados, en particular cuando sobre las temáticas decididas, se insiste sin introducir variante alguna, casos en los cuales habrá de sujetarse a lo dispuesto en aplicación de los principios de economía procesal, eficiencia y cosa juzgada, puesto que, de lo contrario, podrían debatirse perennemente los asuntos judiciales, lo cual implicaría no solamente una limitación injustificada de la seguridad jurídica sino un desgaste ineficaz de la administración de justicia..."

Línea jurisprudencial reiterada en sentencias de tutela STP17535-2016 radicado interno 89341 del 1 de diciembre de 2016 y T-267 de 2017, donde esta última señala que:

"Ahora bien, es de resaltar que este derecho, como todos, debe ser usado en debida forma, de manera que la conducta de su titular no resulte contraria a la buena fe, la moral, las buenas costumbres y a los fines sociales y económicos del derecho. Específicamente, en materia de acceso a la administración de justicia, y de formulación de peticiones ante las autoridades judiciales en el marco de un



JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

proceso judicial, no procede la tramitación de solicitudes relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad competente, los cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida, siempre y cuando (i) se basen en la misma realidad probatoria y, (ii) reiteren identidad de razonamiento jurídico. Así, cuando una autoridad se enfrente a una petición reiterativa ya resuelta, ésta puede remitirse a las respuestas anteriores sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento que estudie el fondo de la cuestión debatida. Esto, se sustenta en los principios de eficacia y economía en la labor judicial"

Conforme con lo expuesto y delineado por la jurisprudencia, el Despacho reitera que estará a lo ya resuelto en las providencias del 2260 del 26 de septiembre de 2017 y 2695 del 25 de septiembre de 2018, en las se le negó la libertad condicional al señor **BERNEY SIERRA CASTRO**, confirmadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en providencias del 21 de junio de 2018 y 02 de julio de 2020, respectivamente.

Por lo expuesto, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS - META.

RESUELVE

PRIMERO: REDIMIR la pena impuesta a **BERNEY SIERRA CASTRO** en 02 meses y 26.5 días.

SEGUNDO: Negar la libertad condicional al condenado **BERNEY SIERRA CASTRO**, conforme a lo ya resuelto en las providencias del 2260 del 26 de septiembre de 2017 y 2695 del 25 de septiembre de 2018, confirmadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en providencias del 21 de junio de 2018 y 02 de julio de 2020, respectivamente.

Contra el numeral primero de la parte resolutive de esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Contra los demás numerales de la parte resolutive de esta decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL GÓMEZ BERNAL
JUEZ

LIVM

¹ Esta regla aplica de manera igual frente a las peticiones reiterativas en materia de derecho de petición. En este sentido, la Corte en Sentencia C-851 de 2014 estableció que el artículo 19 de la ley estatutaria de derecho de petición es conforme a la Constitución Política, en tanto aplica los principios de eficacia y economía, establecidos en el artículo 209 Superior. De esta manera, cuando se presentan peticiones reiterativas, las autoridades públicas pueden remitirse a respuestas anteriores.

Acacias (Meta), quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021).

CUR:	2007-00009 (ACUMULADO 2005-00022)
PROCESO NO:	2012-00148
CONDENADO:	Ley 600 de 2000 - Juz. Esp.
DELITO:	BERNEY SIERRA CASTRO
SUSTANCIACIÓN:	SECUESTRO EXTORSIVO Y HURTO CALIFICADO AGRAVADO
	053

1.- El condenado **BERNEY SIERRA CASTRO**, quien cumple pena acumulada de 320 meses de prisión y se encuentra privado de la libertad desde el 11 de mayo de 2005 a la fecha de esta decisión, solicita se le conceda la libertad condicional, indicando que cumple con los requisitos para acceder a dicho beneficio liberatorio; sin embargo, no allega nuevos elementos de juicio que cuestionen de fondo los argumentos ya expuestos al memorialista.

En efecto, mediante autos interlocutorios 2260 del 26 de septiembre de 2017 y 2695 del 25 de septiembre de 2018, este Juzgado se ocupó de resolver la solicitud de libertad condicional del condenado **BERNEY SIERRA CASTRO**, negándose el paliativo penal, al no cumplirse con uno de los requisitos establecidos en el artículo 64 del código penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004 y a su vez modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, esto es, **al obtener un resultado negativo de la valoración efectuada a la conducta penal**.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante proveído del 21 de junio de 2018, al confirmar la decisión del 26 de septiembre de 2017, indicó:

*"[...] nótese que los juzgadores señalaron en las sentencias condenatorias que las conductas cometidas por **BERNEY SIERRA CASTRO** eran graves, pues aparte de lesionar el bien jurídico del patrimonio económico, se colocó en inminente riesgo la vida de varias personas que se encontraban en la residencia en el momento del acontecer delictual, quienes estuvieron en desventaja por la presencia de armas de fuego, intimidaciones y amenazas a la vida e integridad personal por parte de los encartados. También se resaltó la suma gravedad del secuestro extorsivo por cometerse sobre un menor de escasos 4 años de edad, lo cual denotaba el máximo irrespeto por los derechos de los niños, sujeto de especial protección por el Estado y la sociedad."*

Así mismo, la referida Corporación, mediante proveído del 02 de julio de 2020, al confirmar la decisión del 25 de septiembre de 2018, indicó:

*"[...] el juzgador señaló en la sentencia condenatoria del 24 de julio de 2009 que la conducta cometida por **Berney Sierra Castro** era grave pues afectó bienes jurídicos de diferentes personas, entre ellas un menor de solo cuatro años de edad, sobre quienes ejerció actos de violencia y les privó de su derecho a "la libre locomoción", lo que demostró irrespeto por los derechos ajenos, en especial por el niño, sujeto de especial protección constitucional"*

Así las cosas, acertó el A quo al negar al sentenciado la libertad condicional solicitada..."

En consecuencia, al no contar actualmente con elementos nuevos de juicio, que permitan establecer una valoración de la conducta diferente a la ya establecida, pues la situación del penado no permite conceder la libertad solicitada, y en respeto al principio de la seguridad jurídica de las providencias ejecutoriadas, este despacho deberá estar a lo resuelto sobre el tema en los interlocutorios en cita, atendiendo lo decantado por la jurisprudencia, cuando quiera que se repitan pretensiones fundamentadas en supuestos

facticos y jurídicos similares y decididos judicialmente, así lo refirió la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en auto de 28 de enero de 1998:

"...no procede la tramitación de solicitudes que repitan cuestionamientos anteriores, respondidos en forma oportuna y debida, cuando se basan en la misma realidad probatoria y refieren identidad de razonamiento jurídico"

O el pronunciamiento de la misma Alta Corporación en sede de Tutela, Rad. 37488 de julio 15 de 2008, que señaló:

"...Resulta entonces, ajustados al ordenamiento los autos atacados por cuanto, se refiere, lo solicitado ya había sido resuelto y no es viable debatir reiteradamente asuntos judicialmente consolidados, en particular cuando sobre las temáticas decididas se trata sin introducir variando alguna, casos en los cuales habrá de sujetarse a lo dispuesto en aplicación de los principios de economía procesal, eficiencia y celeridad juzgada, puesto que, de lo contrario, podrían debatirse permanentemente los asuntos judiciales, lo cual implicaría no solamente una limitación injustificada de la seguridad jurídica sino un desgaste innecesario de la administración de justicia..."

Línea jurisprudencial referida en sentencias de tutela STP1/535-2016 radicado interno 89341 del 1 de diciembre de 2016 y T-267 de 2017, donde esta última señala que:

"Ahora bien, es de resaltar que este despacho, como todos, debe ser usado en debida forma, de manera que la conducta de su titular no resulte contraria a la buena fe, la moral, las buenas costumbres y a los fines sociales y económicos del derecho. Específicamente, en materia de acceso a la administración de justicia, y de formulación de peticiones ante las autoridades judiciales en el marco de un proceso judicial, no procede la tramitación de solicitudes relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad competente, los cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida, siempre y cuando (i) se basen en la misma realidad probatoria y, (ii) refieren identidad de razonamiento jurídico. Así, cuando una autoridad se enfrenta a una petición reiterativa ya resuelta, esta pueda remitirse a las respuestas anteriores sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento que estudie el fondo de la cuestión debatida. Esto, se sustenta en los principios de eficacia y economía en la labor judicial."

Conforme con lo expuesto y delineado por la jurisprudencia, el Despacho refiere que estará a lo ya resuelto en las providencias del 2260 del 26 de septiembre de 2017 y 2695 del 25 de septiembre de 2018, en las se le negó la libertad condicional al señor **BERNEY SIERRA CASTRO**, confirmadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavieja en providencias del 21 de junio de 2018 y 02 de julio de 2020, respectivamente.

Luego, frente al alegado derecho a la igualdad con relación a su compañero de causa que ya goza del disfrute de la libertad condicional otorgada por otra autoridad judicial, se tiene que en el sistema judicial colombiano opera el principio de autonomía e independencia de los jueces en sus providencias, en el sentido que las decisiones de aquellos no atentan a los demás, lo cual, no implica vulneración al principio de igualdad.

¹ Esta regla aplica de manera igual frente a las peticiones de revisión en materia de derecho de piedad. En este sentido, la Corte en Sentencia T-451 de 2014 estableció que el artículo 19 no es garantía de derecho de piedad ya conforme a la Constitución Política, en tanto aplica los principios de eficiencia y economía, está enfocada en una sola petición. De esta manera cuando se presentan peticiones reiterativas, las autoridades judiciales pueden remitirse a las respuestas anteriores.



2.- Por el Centro de Servicios de estos Juzgados, ofíciase a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta municipalidad, solicitándole se sirvan remitir los certificados de cómputo de las actividades realizadas por el penado **BERNEY SIERRA CASTRO** desde el 01 de julio de 2020 a la fecha, con la correspondiente calificación de conducta, con el fin de realizar estudio de redención de pena.

De lo anterior, entárese al judicializado.

COMUNIQUESE y CÚMPIASE

GABRIEL GÓMEZ BERNAL
JUEZ

DVM



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría General

Bogotá D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Se recibió en la Secretaría General de la Corporación, la acción de tutela instaurada por los señores LUIS FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ y ADALBERTO ESCOBAR E., contra la Presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.


DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SECRETARÍA GENERAL

No. 11- 001-02-30-000-2021-00198-00

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2021

Repartido al Magistrado

Dr. Diego Eugenio Corredor Beltrán

El Presidente

La Secretaria

Bogotá, D.C., 11 MAR. 2021

En la fecha pasa al Despacho del doctor Corredor Beltrán, Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corporación, a quien correspondió por reparto, la anterior acción de tutela.

Consta de 1 cuaderno con 63 folios.


DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General